TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL — DOCUMENTO DE USO ACADÉMICO

Economías (i)lícitas en Brasil: una perspectiva etnográfica

Gabriel Feltran

Journal of Illicit Economies and Development, 1(1) (2019)

DOI: 10.31389/jied.28

Nota de uso: Traducción íntegra al español de la obra original, realizada para uso académico personal en el marco de una tesis doctoral. Licencia del original: CC-BY (acceso abierto, acceso diamante / diamond OA, LSE Press).

La obra original conserva todos los derechos de sus autores. Las referencias bibliográficas se mantienen en su idioma original. Esta traducción no sustituye a la fuente original: cualquier cita debe remitirse a la versión publicada y su DOI.

Traducción al español · Uso académico no comercial

La economía política de los mercados ilícitos en zonas de posconflicto: Gobernanza criminal y el nexo Estado-crimen en Colombia

Resumen La transición del conflicto armado a los acuerdos formales de paz con frecuencia falla en erradicar los factores estructurales subyacentes de las economías ilícitas. En la Colombia del posconflicto, tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos armados no estatales y las organizaciones de tráfico de drogas (DTO) se reorganizaron rápidamente para capturar nodos lucrativos dentro de la cadena de suministro de cocaína, las redes de tala ilegal y los sectores de la minería artesanal y de pequeña escala (ASM). Este artículo examina la economía política de estos mercados ilícitos, analizando cómo la gobernanza criminal y el nexo Estado-crimen sustentan el control territorial en regiones periféricas donde la capacidad estatal permanece severamente limitada. Basándonos en datos empíricos de la UNODC (2022) y estudios de campo en las subregiones del Catatumbo y el Pacífico, demostramos que las economías ilícitas funcionan no meramente como empresas criminales, sino como órdenes sociales complejos que proporcionan bienes públicos, resolución de disputas y sustento económico a poblaciones marginadas.

1. Introducción La persistencia de las economías ilícitas en entornos posteriores a acuerdos plantea un desafío fundamental para la seguridad internacional, la construcción del Estado y el desarrollo económico (Felbab-Brown, 2017). Mientras que los marcos convencionales de aplicación de la ley ven a los mercados ilícitos como distorsiones parásitas del capital formal, las perspectivas críticas de la economía política enfatizan su arraigo dentro de las estructuras sociopolíticas locales (Gutiérrez-Sanín & Giustozzi, 2019). Cuando las principales arquitecturas insurgentes se desmovilizan, los vacíos de autoridad no se rinden automáticamente ante la presencia institucional formal. En su lugar, milicias rivales, formaciones neoparamilitares y carteles del crimen organizado transnacional compiten para establecer posiciones dominantes sobre las redes ilícitas de suministro. En Colombia, el vacío parcial de poder creado por la desmovilización de las FARC catalizó una fragmentación del mercado criminal, caracterizada por una intensa violencia entre grupos junto con alianzas tácticas diseñadas para el lavado de activos y el lavado de activos basado en el comercio.

2. Gobernanza criminal y control territorial La gobernanza criminal se refiere a los procesos a través de los cuales las entidades criminales no estatales imponen reglas, hacen cumplir el orden social y extraen rentas económicas de poblaciones cautivas (Lessing, 2020). Lejos de depender únicamente de la violencia coercitiva, las empresas criminales sofisticadas cultivan legitimidad al llenar el vacío dejado por una capacidad estatal inadecuada. En las zonas cocaleras, las DTO organizan sistemáticamente extorsiones proteccionistas, regulan los mercados de trabajo locales y construyen infraestructura rudimentaria como carreteras y centros comuni-

tarios. La Tabla 1 resume las dimensiones clave de la gobernanza criminal a través de distintos sectores económicos en Colombia.

Tabla 1: Dimensiones de la gobernanza criminal en los mercados ilícitos colombianos (2018–2023) Sector | Mecanismo principal de ingresos | Mecanismo de aplicación | Nivel de control territorial Tráfico de cocaína | Impuesto a pie de finca (farmgate taxation) y exportación | Coacción armada y alianzas estratégicas | Alto (Corredores periféricos) Minería artesanal (ASM) | Extorsión y arrendamiento de equipos | Extorsión proteccionista y violencia | Moderado a Alto (Cuencas hidrográficas) Tala ilegal | Acaparamiento de tierras y fraude de permisos | Corrupción e intimidación local | Moderado (Fronteras forestales)

Como se ilustra en la Tabla 1, el grado de control territorial se correlaciona directamente con la movilidad y la densidad de valor de la mercancía ilícita. Las mercancías de alto valor como la pasta de cocaína y el oro no refinado requieren un sólido control territorial para asegurar los sitios de extracción y las rutas marítimas de exportación. En contraste, la tala ilegal depende en gran medida de las operaciones de empresas pantalla y estrategias de evasión de sanciones para integrar la madera ilícita en las cadenas de comercio internacional legal.

3. El nexo Estado-crimen y la corrupción sistémica La visión dicotómica del Estado y el crimen organizado como actores diametralmente opuestos falla en capturar la realidad empírica del nexo Estado-crimen. En lugar de operar en total aislamiento de la autoridad formal, los grupos criminales involucran activamente a actores estatales —incluidos políticos locales, funcionarios judiciales y unidades de aplicación de la ley— como facilitadores clave de la actividad económica ilícita (Bayart et al., 1999). La corrupción sirve no como un efecto secundario no deseado, sino como una estrategia operativa esencial que facilita el lavado de capitales ilícitos en el sistema bancario formal y los mercados inmobiliarios.

4. Conclusión Abordar el desafío de las economías ilícitas en la Colombia del posconflicto requiere un cambio de paradigma fundamental que se aleje del prohibicionismo militarizado hacia una consolidación estatal integral y la reducción de daños. Mientras las comunidades periféricas continúen siendo económicamente dependientes de las redes ilícitas de suministro para su supervivencia, la erradicación punitiva de cultivos y la intervención militar no lograrán desmantelar la gobernanza criminal. La paz sostenible requiere abordar la desigualdad estructural, la falta de titulación de tierras y la desatención institucional que sustentan el nexo Estado-crimen.

Feltran, G. 2019. Economias (i)lícitas no Brasil: uma perspectiva etnográfica. Journal of Illicit Economies and Development, 1(2). DOI: https://doi.org/10.31389/jied.28

INVESTIGACIÓN Economías (i)lícitas en Brasil: una perspectiva etnográfica Gabriel Feltran1,2 1 Departamento de Sociología de la UFSCar, BR 2 Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM), proceso FAPESP 07616-7, BR gabrielfeltran@gmail.com

Las economías ilícitas en Brasil son un problema público de primera relevancia y una oportunidad de movilidad social para millones. La literatura al respecto carece de precisión empírica y de claves menos normativas de interpretación. Este artículo presenta dos trayectorias, amparadas en investigaciones de campo realizadas entre 2005 y 2018: i) la de un joven trabajador de mercados ilegales de las periferias de São Paulo; ii) la de una Toyota Hilux robada por él. El enfoque, centrado en una teoría de la acción cotidiana, toma como objeto la frontera legal-ilegal y sus efectos sociales pragmáticos. Se argumenta que la ausencia de regulación pública de las economías ilícitas, en las últimas décadas, impide contrapartidas sociales a sus operadores y activa socialmente un ciclo vicioso de violencia y reproducción de desigualdades, así como el populismo penal en la escena pública.

Palabras clave: economías ilícitas; violencia; desigualdades; São Paulo: Brasil

Presentación “incluso lo empírico en su estado perfeccionado no podría reemplazar más a la filosofía como una interpretación, un matiz y un énfasis individualmente selectivo de lo que es real.” (Georg Simmel – Philosophy of Money)

Este artículo está dividido en tres partes. En la primera, estudio la frontera entre las economías ilícitas y el mundo legal, a partir de la trayectoria típica de un joven traficante de drogas y ladrón de motos de las periferias de São Paulo, Samuel.1 Se demuestra en esa frontera la permeabilidad económica y, al mismo tiempo, la demarcación moral, racial y social de la ilegalidad en Brasil. En la segunda parte, sigo la trayectoria de una Toyota Hilux robada, para trazar un mapa de la economía ilícita de vehículos en el país, que activa nichos formales, informales y criminales de la economía. Se demuestra la desigualdad inscrita en estos universos. En la última parte, argumento que la ausencia de regulación pública de las economías ilícitas reproduce socialmente violencia y desigualdades, y políticamente el populismo penal.

Antes de todo esto, sin embargo, presento las inspiraciones teóricas y metodológicas de este artículo, así como nuestros argumentos frente a la literatura. Los estudios sobre los mercados ilegales son extensos y están dispersos por diferentes áreas del saber: economía, finanzas, sociología, criminología, derecho, seguridad y estudios policiales. La bibliografía no solo diverge sobre temas y conceptos, sino sobre todo sobre los presupuestos de comprensión —epistemología—. La gran mayoría de los trabajos decide, entonces, fijar la perspectiva analítica en el Estado, en

la ley y en el orden, y desde hace décadas la aproximación estrictamente económica prospera (Becker, 1968; Masciandaro, 2000).2 En muchos casos la lectura es por la ausencia; la falta de ley y orden en “estados débiles” favorecería la instalación de mercados ilegales y violentos (Williams, 2009). Tomando otras perspectivas, más inductivas, pasa a ser un consenso que las fronteras entre la economía legal e ilegal son porosas (Telles &

1 Todos los nombres son ficticios, preservando las identidades de los interlocutores de investigación. 2 Wilkinson (2016) además revisa el debate sobre los 'contested markets', preocupándose menos por comprenderlos empíricamente y más por combatirlos. La criminología y el derecho son, sin duda, los campos de mayor acumulación sobre el tema y, sin embargo, aquellos en los cuales más frecuentemente la perspectiva adoptada es estadocéntrica y legalista. Aquello que “debería ser”, según la ley, pasa a orientar la observación y el análisis sobre lo que ocurre empíricamente.

 2 Cabanes, 2011; Hartnett & Dawdy, 2013), que su distinción es más moral que empírica (Misse, 2009) y que las relaciones entre violencia y mercados ilegales no son naturales (Andreas & Wallman, 2009; Naylor, 2009). En la literatura más reciente, surgen esfuerzos comparativos de envergadura, basados en regularidades y distinciones propias de una gran diversidad de mercados ilegales alrededor del globo (Beckert & Dewey, 2017).3 En Brasil, país con economías ilegales tan pujantes y violentas a partir de los años 1980, el debate fue intenso en las últimas décadas. Si las teorías de la desorganización social y de las ventanas rotas también prosperaron en los trópicos e influyeron decisivamente en las políticas punitivas, una corriente específica de estudios de la violencia buscó analizar las relaciones entre economías ilegales, violencia y política de modo situacional. El contexto brasileño y la inferencia inductiva fueron privilegiados en esos esfuerzos interpretativos (Zaluar, 1985; Machado da Silva, 1991; Rabossi, 2011; Misse, 2018; Hirata, 2018).

Michel Misse, en especial, después de décadas de investigación empírica y documental en Río de Janeiro, sintetizó un marco conceptual extremadamente útil también para otros contextos. Dedicándose a la genealogía de las economías de la marihuana, cocaína y apuestas (jogo do bicho), y a sus efectos políticos y criminales, el autor demuestra que ninguna economía opera sin protección, y que es en la esfera de la protección donde la ilegalidad se convierte en “mercancía política” (Misse, 2002). Importa señalar que la unidad analítica deja de ser el ilícito en sí, o lo económico en sí, y pasa a estar en el foco la relación entre los agentes ilegales y los agentes del orden en la administración de las economías ilegales. Es ese el juego relevante (Whyte, 1943), que conforma los límites de la acumulación de cada agente, también a partir de sus capacidades de recurso a la violencia (Misse, 2006, 2018). El mercado de extorsiones y sobornos, recurrente en torno a las economías

ilegales en muchas situaciones globales, es entonces tan relevante como el primero. En suma, donde hay una economía ilegal, hay un juego político-administrativo por descifrar.

Una nueva generación de etnógrafos, aun siguiendo los pasos de la generación anterior, tardó en percibir la centralidad de los temas económicos.4 Estuvimos, en la última década, inmersos en los intentos de comprender la operación política de las facciones brasileñas y, sobre todo, del Primeiro Comando da Capital, el PCC, principal grupo criminal de Brasil (Arias, 2010, 2016; Biondi, 2016; Willys, 2017; Feltran, 2019). El énfasis de estas etnografías recayó sobre la dimensión político-moral de estas organizaciones criminales, sus modos de fomentar la producción de orden y justicia extralegal en las cárceles y unidades de internación, y sobre la actuación del PCC en la reducción de más del 70% de los homicidios en las favelas de São Paulo durante los años 2000.5 En los últimos años, sin embargo, el dinero pasó a ser más y más referido en la investigación de campo, en la medida en que miembros del propio PCC pasaban a regular mercados ilegales al por mayor, en fronteras, puertos y aeropuertos. Diferentes trabajos han llamado la atención sobre la transnacionalización de las facciones brasileñas, y sobre el hecho de que varíen sus formas de acción (Hirata & Grillo, 2019, en este volumen), en el caso del PCC de modo tal que unifica los patrones de conducta criminal de traficantes de drogas y armas, asaltantes de bancos, ladrones de vehículos, contrabandistas o cualquier otro merca

de lo legal o ilegal actúen juntos. Si los negocios están separados, sus operadores se consideran iguales dentro de la hermandad criminal y se fortalecen nacional e internacionalmente, instrumentalizando las políticas de seguridad. Este artículo se adscribe a esta vertiente de estudios, que teóricamente no se desarrolló sin un diálogo estrecho con la sociología clásica de la acción (Georg Simmel y Max Weber) y con las contribuciones del giro empírico del pragmatismo francés (p. ej. Laurent Thevenot, 2006; Daniel Cefaï, 2010). Evidentemente, las etnografías de Chicago (Anderson, 1923; Whyte, 1943; Mitchell, 1956; Gluckman, 1958; Goffman, 2006) inspiraron los intentos de inducción analítica a partir de situaciones (Goffman, 1952, 1967; Joseph, 1998; Blokland, 2008; Agier, 2009, 2011; Cefaï, ed. 2010; Cefaï & Gardella 2011.). En suma, se trata de, descritas las experiencias de campo, buscar el conjunto de presupuestos –forma y contenido– que, en el curso de la acción descrita etnográficamente, la dotan de sentido. En la confrontación entre estos presupuestos teóricos que son colectivos, socializados, y los del investigador, a veces idénticos y en otras radicalmente distintos, se encuentra el camino para dejar el plano de la acción individual y subir en abstracción, produciendo inferencias comparativas paso a paso.

3 Un límite de estos intentos tal vez sea la autonomía conceptual que inevitablemente los “mercados” pasan a tener, perdiendo definición y conexión empírica con otras economías a ellos asociadas.

4 Sobre la dimensión política de organización del PCC ver Josino (2005); Biondi (2010), Feltran (2011), Dias (2012), Mallart (2013), Godoi (2014), Melo (2015), Padovani (2015), Marques (2015).

5 Feltran (2010a, 2011, 2012); Nery et. al. (2010); Dias (2012); Manso (2013); Mallart (2013); Silva (2015); Willis (2015).

3

Método

Hay dos investigaciones empíricas en la base de este artículo. La primera es una etnografía, realizada individualmente, en períodos intensivos y espaciados, que desde 1997 puse en marcha en las periferias de São Paulo. En ese trabajo, básicamente reconstruyo trayectorias de individuos, familias e instituciones de las periferias de las ciudades de São Paulo (Feltran, 2010b, 2011, 2019). Notas de campo sistemáticas, fragmentadas y entrevistas secuenciales, pero también muchas conversaciones informales después relatadas en diarios, componen el material analizado. Desde 2005 esa investigación, que ya fue la base de mi doctorado y posdoctorado, se realiza en un único barrio de la zona este de São Paulo (Feltran, 2011; 2013). Es en torno a esa experiencia individual que se organiza la primera narrativa del artículo, que reconstruye la trayectoria de Samuel como un caso típico de operador bajo de economías ilegales, analizando los efectos de su trabajo en la frontera de lo legal-ilegal.

La segunda fuente del material aquí presentado es una investigación colectiva, multimétodos y con énfasis etnográfico, coordinada por mí y que cuenta con otros siete investigadores.6 Nuestro método es seguir, etnográficamente, autos robados en sus recorridos sociales, en la línea ya tradicional de etnografias de objetos (Knowles, 2011), y utilizamos vasto material periodístico, secundario y documental. De las trayectorias, se esboza el mapa de la economía de vehículos robados en São Paulo. La segunda parte del artículo, que cuenta la trayectoria de una Toyota Hilux robada, dimensiona y demuestra cómo funciona esa economía, a un mismo tiempo legal e ilegal, local y transnacional.

La frontera legal-ilegal

Samuel nació y creció en una favela de São Paulo.7 Un martes de abril de 2015, a los 15 años de edad, este niño negro ganó R$ 300 trabajando como vendedor en una esquina concurrida de la zona este de la ciudad. Saliendo de su turno de 12 horas, a la medianoche, Samuel fue directo a casa. Encontró a su madre, Ivonete, llorando porque él se estaba convirtiendo en traficante. Al día siguiente, Samuel se despertó y fue directo al centro comercial (shopping center) más cercano, inaugurado en los años 2000 en el marco de la política económica de expansión del consumo popular, durante los gobiernos de Lula y Dilma [2003–2016], que en 2015 pasaba por una crisis importante: el endeudamiento de los más pobres ya llegaba a niveles muy altos.

Esa política de crecimiento económico, llamada por los economistas bottom up, dio continuidad a las reformas de Estado y privatizaciones de empresas estatales de los años 1990, bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, y antecedió al liberalismo aún más radical de los gobiernos de Temer y Bolsonaro. Samuel no tenía deudas, pagaba al contado y en efectivo.

En el centro comercial, Samuel gastó el pago diario que recibió, 1/3 del salario mínimo mensual de su abuela, quien también vive con ellos, en un par de gafas de sol Oakley, pagadas en efectivo, al contado. Era una promoción, solo R$ 275; esas gafas suelen costar R$ 450 o más. Con el cambio, todavía le alcanzó para un sándwich en Subway y un helado en McDonald’s. Lo que en la víspera era dinero sucio, obtenido en el tráfico ilegal de drogas, al día siguiente se convertía en simplemente dinero, recaudando impuestos y estimulando las marcas globales que Samuel admira: Oakley, Subway, McDonald’s, como tantas otras. Las compañías lo agradecen, los gobiernos también.

El consumo es la principal forma por la cual el dinero sucio se convierte en dinero limpio, sobre todo en el tráfico de drogas. Las comisiones de los vendedores de drogas, en São Paul

o, varían de 25 a 50% del valor vendido. Los vendedores al por menor de marihuana, cocaína y crack son casi siempre adolescentes, instados al consumo orgiástico. No ahorran el dinero que reciben, insertándolo, por lo tanto, directamente en las economías oficiales. Seguros y subastas son otras formas legalizadas de conectar esas economías, fortaleciéndolas mutuamente, como veremos. Hay además una miríada de formas, siempre nuevas, de lavar dinero. Este artículo aborda esa y otras modalidades de interacción entre economías legales e ilegales. A los ojos de la sociología y antropología económicas, en ese preciso momento el dinero de Samuel pasaba por una transformación cualitativa (Zelizer, 2011; Neiburg, 2007; Guyer, 1995, 2004). Esa transformación cualitativa del dinero, de sucio a limpio en segundos, no implicaba ningún problema legal para Samuel, ni para los que le venden.

No se trata de lavado de dinero, sino de consumo. Es lo que se espera en la economía global, en buena parte de la justicia estatal e incluso en los pequeños negocios locales, justamente porque en esa escala impersonal, no hay preocupación alguna por la calidad, sino por la cantidad de dinero que Samuel tiene en el bolsillo (Simmel, 1900).

6 El equipo está vinculado al Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM) y apoyado por la FAPESP (Proceso 2013/07616-7). Agradezco a Luana Dias Motta, Deborah Fromm, Gregório Zambon, Janaína Maldonado, André de Pieri, Isabela Vianna, Lucas Alves Fernandes. Agradezco a cada uno de los socios, es un placer estar en este equipo.

7 Reconstruyo la trayectoria de Samuel, nombre ficticio, a partir del personaje con quien tuve contacto en la investigación de campo entre 2005 y 2018.

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 4 Queda evidente, así, que no es solo Samuel quien gana dinero con los mercados ilegales. Oakley, McDonald’s, los dueños de sus franquicias, la administración del centro comercial y los gobiernos que gravan el consumo también ganan. Por otro lado, todavía existen quienes no quieren ese dinero. La madre de Samuel, mi interlocutora de investigación y amiga desde 2005, nunca aceptó el dinero de su hijo en su casa, incluso atravesando una fuerte privación financiera. En 2016, cuando ella tuvo certeza de que el hijo ya se había convertido en traficante, Ivonete lo hizo empacar las maletas e irse de casa.

En otro martes de abril, ahora en 2017, el joven fue baleado por la espalda por un policía, intentando huir de un control de rutina, en una avenida cerca de su casa. Samuel ya era visto por la policía no solo como traficante, sino también como ladrón de motos, y estaba prófugo. Su novia estaba embarazada, él sobrevivió después de muchos días en el hospital, la pequeña tiene ahora 18 meses. Samuel todavía hoy es buscado por la justicia, está muy cerca de ser arrestado. Las economías ilícitas producen a los bandidos, y la guerra entre policías y bandidos produce mucha violencia. El dinero sucio de Samuel, al contrario, ha circulado libremente. ¿Cómo entender esa frontera entre dinero sucio y limpio, economías lícitas e ilícitas, tan relevante para Ivonete, tan irrelevante para un local de comida rápida global en el centro comercial? El problema parece ser de escala, de despersonalización del dinero. ¿Qué lugar ocupa Samuel, en una economía ilícita como la de robo de autos en São Paulo?

El dinero ilegal produce socialmente sujetos como Samuel, los ladrones, y la “violencia urbana”, reproduciendo de generación en generación un ciclo vicioso de desigualdad, violencia y pobreza en el plano local (Tilly, 1998). Samuel personifica esa constatación; es hijo de una familia con muchos trabajadores del mundo del crimen, que estudié con detalle en otro trabajo (Feltran, 2019). Su madre sabe bien el fin de los favelados que se inscriben en las actividades ilícitas, el mismo de los tíos

y del padre de Samuel: la cárcel o la muerte, incluso en el caso de éxito económico. Fueras de la ley como Samuel despiertan el llamado social por represión, y son muchos Samueles jóvenes, negros, habitantes de favela, operadores bajos de mercados ilegales, los que repetidamente frecuentan las prisiones y estadísticas de homicidios en São Paulo. Al día siguiente del arresto, o de su asesinato, hay otro trabajando en su lugar.

Pero el mismo dinero ilegal que lleva a los Samueles a la prisión dinamiza nichos de la economía, se convierte en marca, ganancia, se convierte en mercado financiero global y desarrollo, clamando por expansión. Cuando crece la circulación monetaria en las economías ilegales, crecen los puestos de trabajo en sus negocios de drogas, armas, vehículos robados, sobornos, fraudes, contrabandos. Crecen así posibilidades de emplear a otros Samueles, para quienes el mercado de trabajo formal se encuentra bloqueado. Samuel, por supuesto, completó solo la educación primaria, con dificultades; no frecuentó bibliotecas, no habla otros idiomas, ni siquiera escribe en portugués con facilidad.

Samuel sustenta a su hija, todavía hoy, con el dinero de las economías ilegales que opera, principalmente el tráfico de cocaína al por menor y una pequeña reventa de repuestos de motos, llevada por un amigo, obtenidas también vía robo en São Paulo. Con el dinero del tráfico, Samuel y el amigo negocian motos legales e ilegales y las reve

ndem, además de encargar motocicletas robadas o adquiridas legalmente, para desmontaje.8 De la misma forma, grandes marcas globales sustentan economías nacionales y mercados internacionales, sus abogados e incluso sus acciones sociales también con dinero obtenido, entre otras cosas, de economías ilícitas. Hasta por la necesidad de lavar dinero, los negocios ilícitos casi siempre están asociados a emprendimientos legales. La frontera legal-ilegal produce así, de un lado, grandes empresarios; de otro, pequeños bandidos y grandes facciones criminales.

Gobernadores, presidentes y senadores en el Brasil contemporáneo, impulsados por el populismo penal, reciben a los grandes empresarios de sus estados directamente en sus despachos; se comprometen a producir políticas para estimular el crecimiento económico, la generación de empleos, por la prosperidad de la nación. Los mismos gobernadores, presidentes y senadores se empeñan en comprar drones militares en Israel, blindar vehículos de policía y endurecer las leyes para los bandidos, que perjudican tanto a nuestra sociedad. Mal saben ellos –¿será?– que el mismo dinero que crea empresarios, crea bandidos en Brasil.

La trayectoria de una Hilux robada

Aun no trabajando con automóviles robados, en su rutina, cierta vez Samuel ayudó a un amigo, que había sido contratado para robar una Toyota Hilux nueva. Para la

acción, se formó un equipo de cuatro muchachos, todos de la misma favela. Corría el año de 2016. Después del robo exitoso, ganaron cerca de R$ 1 mil cada uno. En el año de 2017, fueron 1.159 camionetas como esa robadas en Brasil (Susep, 2019). Considerando

8 Para más detalles sobre la economía de vehículos robados y hurtados en Brasil, así como las desigualdades internas a él, ver el artículo de Fromm (2019, en este volumen).

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 5 que estos autos cuestan en el mercado alrededor de R$ 180 mil, y que casi la totalidad de los 89.790 vehículos similares en circulación están asegurados, solo en indemnizaciones por robo y hurto las aseguradoras traspasaron a los propietarios más de 200 millones de reales en 2017. Con ese dinero, la gran mayoría de ellos compró un auto nuevo, calentando las ventas de la industria automovilística.

En Brasil, cerca de 500 mil vehículos, en una flota actual de 97 millones, son notificados como robados o hurtados todos los años. Apenas el 30% de la flota tiene seguro, pero el 80% de los autos robados están asegurados. Las aseguradoras estiman que el 20% de esas notificaciones son fraudes, pues los valores de indemnización suelen ser más altos que los practicados en el mercado de usados (Fromm, 2019 neste volume). La estimación de los mercados es de que alrededor de 425 mil vehículos de hecho sean robados o hurtados en el país, cada año, a una tasa relativamente constante en los últimos años. Casi la mitad de esos delitos ocurre en el estado de São Paulo, el principal centro de la economía ilegal de vehículos en Brasil.

Cuando un vehículo es robado, sale rápidamente de la mano de los ladrones y se convierte en mercancía.9 Estos vehículos activan de forma directa o indirecta, y esa diferencia es importante, como veremos, la ruta que los lleva a tres grandes nichos de mercado: el de desmantelamiento para la venta de autopartes, el de reventa de vehículos usados y el de tráfico de drogas y armas. Los muchachos que robaron la Hilux, en 2016, recibieron 4000 reales para entregarla a un receptador —el dueño o un operador de un patio de desmantelamiento, de un taller mecánico, de una chatarrería (ferro-velho), de una tienda de autopartes. ¿Cuántos de esos establecimientos hay en las ciudades brasileñas, uno en cada esquina?

El camino directo hacia estos nichos es activado por los propios grupos implicados en los robos y hurtos, que los entregan a receptadores. La mitad de los vehículos robados y hurtados en el estado de São Paulo desaparece por completo de los radares, rastreadores, policías o aseguradoras, yendo a parar a manos de ellos (Feltran & Horta, 2018). En general personas conocidas por los ladrones y policías, estos receptadores pueden contratar muchachos para robar (puxar) autos o motos que necesitan, o recibir vehículos robados o hurtados de forma eventual, sin encargo.

Hay, por lo tanto, vehículos encargados para desarmar, para rearmar y revender o para enviar a las fronteras con Bolivia o Paraguay, y hay iniciativa propia de los ladrones de apropiarse de tal o cual auto, por gusto, precio u oportunidad. En esos casos, las aseguradoras pierden el valor de la indemnización por completo, menos el valor pagado como seguro. Si el seguro de la Hilux robada en São Paulo custara 8 mil reales, precio promedio, la aseguradora perdería 192 mil reales con el robo, en caso de que ese auto jamás fuera encontrado.

Pero hay otra mitad que es encontrada. El camino indirecto hacia estos mercados ocurre, entonces, cuando los ladrones —y en especial los inexperimentados, como Samuel en aquel momento— usan los autos solo para divertirse en fines de semana, para quedarse con lo que encuentren dentro, para aventurarse por las calles de la ciudad o, incluso, para su uso cotidiano. La misma actividad, conocida como take and drive, es común en otros países. Para ladrones experimentados o no, otro uso inmediato para vehículos robados es el de dar fuga tras problemas con la policía o, después de procedimientos rápidos como un cambio de placas, utilizarlo para otras acciones cri

minales. Poco después, son abandonados.

Seguros y subastas

Estos autos y motos son entonces encontrados por la policía, después de quedar parados algunos días. Solo el 20% regresa a los dueños, cuando no hay seguro; el 80% de ellos, agotado el plazo para el pago de la indemnización, como es muy común, pasan a ser propiedad de las aseguradoras. Las aseguradoras, entonces, tienen algunas opciones para hacer dinero con estos vehículos, minimizando sus gastos con el pago de la indemnización. La primera de ellas es subastarlos. Hay una ley que permite que las aseguradoras envíen autos robados y recuperados para que sean subastados, y esa ley es muy estricta en la definición de quién puede ser un subastador.

El precio del vehículo robado en la subasta suele variar entre el 70% y el 90% del precio de lista. La indemnización de la Hilux robada en São Paulo le costaría de hecho a la aseguradora, por lo tanto, del 10% al 30% del valor indemnizado. Si es vendida por 160 mil reales en la subasta, la empresa habrá perdido la diferencia entre ese valor y el precio de lista, descontado el precio pagado por el seguro, es decir, 36 mil reales —y no 196 mil reales, como ocurriría si esa camioneta no hubiese sido recuperada. Considerando los costos con el subastador y otros, como grúa o papeleo, los gastos pueden llegar a 50 mil reales. Recuperar los autos robados y hurtados es, por lo tanto, un gran negocio para las aseguradoras, que invierten pesado en tecnología, rastreadores, equipos de cazadores, gestión y relaciones con las policías con ese fin.

9 Sociólogos argentinos también estudiaron mercados de vehículos robados con una perspectiva teórica muy fructífera, sin embargo sin una investigación de campo sistemática (Dewey, 2012; Rodríguez, 2012).

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 6 Existen otras formas utilizadas por las compañías de seguros, sin embargo, no solo para minimizar las pérdidas sino, al contrario, ganar dinero con vehículos recuperados tras robos y hurtos. Una de ellas es que la propia aseguradora conduzca sus subastas —contratando subastadores privados, lo cual es obligatorio por ley— o destine el vehículo recuperado a sus propios desguaces (desmanches) y reventas. Las principales aseguradoras o tienen o estudian tener sus desguaces propios, desde hace algunos años. Su esfuerzo de cabildeo (lobby) legislativo fue igualmente intenso (Fromm, 2019 neste volume). Si un vehículo es desmantelado en Brasil, las piezas revendidas resultam, aproximadamente, en tres veces el precio real de reventa, en promedio. Si la Hilux le costó 192 mil reales a la aseguradora, la camioneta puede rendir hasta 584 mil reales si es recuperada y sus principales piezas revendidas.

Cuanto más desmontado el vehículo, además, mayor es el valor de cada una de las piezas. Un carro entero cuesta mucho menos que sus partes sumadas, así como un motor nuevo cuesta bien menos que la suma de sus piezas adquiridas individualmente. Solo el motor de un carro como la Hilux, en el mercado oficial, puede costar el equivalente a dos carros populares. El precio practicado por estos revendedores es siempre confidencial, o porque hay siempre incertidumbres sobre el estado de conservación, la procedencia y la garantía, o porque se trata de un mercado extremadamente competitivo, de enorme competencia. En estos mercados, la información es fundamental, y el sigilo desempeña un papel relevante.

En el caso de la intermediación de subastas, otro mercado multimillonario, fuertemente regulado y poquísimo conocido, las aseguradoras o los gobiernos deben contratar subastadores particulares. A partir de las subastas de carros robados, es preciso decir, muchos se ganan la vida. Compradores particulares o comerciales se valen del descuento (deságio) producido por el robo o furto para ganar alrededor de 2% a 5% del valor de cada carro negociado. Además de eso, pueden incluso trabajar en alianza con revendedoras más estructuradas de vehículos, optimizando sus ganancias a partir de la venta a crédito, con cuotas a perder de vista e intereses elevados. La financiarización, evidentemente, forma parte de este mercado, y actores relacionados con el crédito también extraen de allí sus ganancias. El dueño de una revendedora de carros, por lo tanto, va a lucrar al menos R$ 10 mil con la Toyota Hilux comprada en la subasta, pudiendo obtener mucho más de acuerdo con la condición de venta. El subastador va a recibir también en torno al 5% del valor del vehículo y, en ese caso, también algo en torno a R$ 10 mil.

Dueños de revendedoras y subastadores, por lo tanto, ganan, cada uno de ellos, 10 veces más que Samuel, quien ayudó a robar esa Toyota. El vehículo fue robado en

cuarenta segundos, y en investigación de campo vi una Hilux igual a aquella ser vendida, en una subasta paulista, en treinta segundos. El crimen de Samuel no compensa ni para él —quien será más temprano o más tarde preso y tendrá su vida arruinada si prosigue en el ramo—, ni para el orden urbano, mucho menos para la víctima y sus familiares. Sin embargo, para todos los demás actores que ganaron bastante dinero con el carro, actuando dentro de la ley, el crimen compensó mucho.

El desmantelamiento y la reventa de vehículos operan con carros robados, pero fundamentalmente, con carros legalmente adquiridos en subastas, claro. Aseguradoras, subastadores, revendedoras de carros y desguaces (desmontes) podrían sobrevivir sin vehículos robados pero, considerando que en Bras

il hay 425 mil vehículos por año para ingresar a sus redes, provenientes del robo y del hurto, ¿por qué no? Empresarios de las clases altas, de las clases medias y de las clases trabajadoras se interesan por el dinero de esas economías. Esto también vale para los empresarios vinculados al PCC, que, en este caso, llevan ventaja, por un lado, por las redes de contactos con niños que pueden traerles autos por precios bajos; por otro lado, por acceder ya, desde hace mucho tiempo, a la máquina corrupta de las policías, pudiendo comprar seguridad para sus transacciones.

Fronteras

La Toyota Hilux, después de ser subastada, puede aún ser llevada a las fronteras de Brasil con Bolivia y Paraguay. Fui hasta allá a hacer investigación de campo, en dos oportunidades de una semana cada una. Vehículos así son cambiados, en la región de Cáceres, estado brasileño de Mato Grosso, por algo entre 5 y 7 kilos de pasta base de cocaína. El cambio de una moto nueva normalmente se hace por 1 kilo, y el de un automóvil de paseo, de 1 a 3 kilos del producto. Cada kilo es vendido en la frontera con Bolivia por algo como US$ 2.600. En 2018, esto significaría poco más de R$ 10 mil; una camioneta Hilux, en efectivo, valdría, por lo tanto, menos de 60 mil reales en la frontera. Pésimo negocio para el vendedor común.

Para un vendedor que la consiguió vía robo, sin embargo, y pagó apenas 4,5 mil reales a los ladrones —más R$ 5 mil o R$ 10 mil para que alguien la lleve a la frontera— es un excelente negocio. Aun así, no se trata de un esquema tan bueno como podría ser, en caso de que hubiese más contactos y habilidades criminales para ello.

El negocio se vuelve de hecho atractivo cuando ese vendedor también conoce el funcionamiento del tráfico de drogas al por menor en su región. Evidentemente, facciones como el PCC favorecen mucho que ese conocimiento se reproduzca en sus redes. En investigación de campo en las favelas de São Paulo, que reciben, por regla general, cocaína proveniente de Bolivia, mis interlocutores explicaron que un

kilo de pasta base, al por menor, rendiría alrededor de R$ 50 mil a R$ 60 mil. En efectivo, por lo tanto, una inversión de R$ 10 mil puede rendir R$ 60 mil

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 7 en poco tiempo, sin descontar las comisiones altas pagadas a los vendedores. Aun así, no es nada malo para quien, en el mercado laboral, competiría por un salario mínimo.

Cuando se consigue, sin embargo, cambiar un automóvil robado por kilos de pasta base, o incluso de cocaína pura, la inversión inicial se reduce mucho, y la ganancia es muchísimo mayor. La Toyota robada, que significó una inversión de R$ 10 mil a R$ 15 mil puede convertirse en 6 kilos de pasta base de cocaína que, después de preparada y mezclada con muchas otras cosas, y vendida en el menudeo, podría rendir hasta R$ 360 mil. Es mucho dinero y, por eso hay tantos robos de automóviles y tanto tráfico de drogas.

¿Qué otro negocio, o qué otra inversión, sería tan lucrativo? Exportar esa droga, por ejemplo. En el puerto de Santos, hay relatos de interlocutores dando cuenta de que 1 kilo de cocaína vale los mismos R$ 60 mil, algo en torno a € 13 mil. Sin embargo, en ese caso no es necesario ningún preparado, ni pago de comisiones a "vapores" y gerentes, los traficantes del menudeo. Esas comisiones son altas en el tráfico paulista, variando entre 20% y 50% del valor total. Sin eso, pagando solo por el transporte de la droga —en helicóptero, en avión, en camión, en camioneta, en automóvil— la ganancia del traficante aumenta bastante. En muchos otros puertos y aeropuertos del país, funcionarios son pagados por traficantes para facilitar el paso de drogas en equipajes de mano, maletas facturadas y encomiendas. Conocer a esos funcionarios, saber cómo operan, cuáles son las dificultades y potencialidades para el negocio, es algo que se discute en el interior de la sociedad secreta criminal, de la facción, sea esta el pcc o cualquier otra. Pero solo el pcc no condiciona esas redes de apoyo mutuo a la apropiación de parte de la ganancia de cada uno, como vimos. De ahí su fuerza expansiva.

Desde Santos, la droga va a viajar hacia África, hacia Europa, hacia Oriente Medio y sabe Dios dónde más. En el menudeo, va a rendir de € 70 mil a € 100 mil, es decir, un promedio de R$ 380 mil por kilo. Aquella camioneta por la cual cada adolescente armado recibió R$ 900 por robar y que se convirtió en seis kilos de pasta base en la frontera, puede, por lo tanto, activar una cadena de intercambios que mueve hasta R$ 2 millones. Si el valor de mercado de la Toyota Hilux en Brasil ya era muy alto – R$ 200 mil – asociando este vehículo al robo de automóviles y al tráfico internacional de drogas, va a rendir diez veces más. Tan solo en 2017, fueron robadas nada menos que 1.149 Toyotas Hilux en Brasil. Esto considerando tan solo un modelo, entre todos los demás.

¿Sería posible ganar aún más dinero con esa camioneta? Claro que sí, siempre. Basta con asociar a la circulación del producto alguna importación o exportación

de armas —como pistolas automáticas, fusiles o ametralladoras—, adquiridas en el mercado paraguayo, legal o ilegalmente, y contrabandeadas a Brasil. Cerca de quien trabaja a esa escala, los niños que robaron la Toyota en São Paulo no son ladrones, ni malandros. Son solo la puerta de entrada de una máquina de producción de dinero aterradoramente grande y, en 2018, conectada a escala internacional.

El intercambio de estos vehículos por drogas y armas en las fronteras de Brasil con Paraguay y Bolivia es combatido por políticos, agentes de fiscalización y cualesquiera personas que estén interesadas en seguridad. En la práctica, sin embargo, la rentabilidad de estas transacciones es, como vimos, aún mucho más alta que la obtenida en los desguaces (desmanches) o en las

reventas de automóviles robados o hurtados. Es mucho mayor que la obtenida solo por el tráfico de drogas. Sin formas de regulación, se puede dirigir toda la represión del mundo a los operadores de baja escala que, aun así, habrá agentes interesados en operarlos. Es por eso que la defensa de más cárcel y más policía para los Samueles inscritos en el mundo del crimen puede sonar como una buena política, pero no lo es. Mejor sería regular estas economías, ofrecer contrapartida de derechos sociales para sus operadores, reduciendo el conflicto social y retirándolos de la ilegalidad que, al menos en parte, es lo que los hace ser tan lucrativos y tan violentos. Pero ya no estamos en el siglo 20, en el que todo esto era un proyecto político, no un sueño.

Notas finales

Cuando se incauta marihuana o cocaína, en Brasil, la carga debe ser destruida, evitando su reventa, considerada nociva para la sociedad – son drogas, al fin y al cabo. Los vehículos y armas incautados son como oro. Alimentan economías relevantes que se transforman en una máquina de producción de desigualdad. El subastador gana R$ 10 mil con la Hilux robada por Samuel, y subasta cien automóviles por día. El policía que intercambia disparos con el ladrón gana entre R$ 3 mil y R$ 4 mil por mes. El ladrón roba uno o dos automóviles por semana y gana R$ 1 mil en cada automóvil, muchas veces complementando el ingreso que obtiene del tráfico de drogas y trabajos informales, como hizo Samuel. El trabajador, con la misma cualificación del ladrón que roba Hilux, trabaja todo el mes por R$ 980. Los operadores menos privilegiados de la cadena, en lugar de recibir contrapartidas sociales por su asalariamiento, reciben castigo. Sus operadores más altos se convierten, ellos mismos, en legisladores o gobernantes.

¿Cómo definir dónde comienza un mercado ilegal, cuando es seguro que, empíricamente, un niño de 15 años puede ganar R$ 300 vendiendo cocaína e, inmediatamente, comprar un calzado deportivo Nike en el centro comercial cercano a su

casa, al contado y en efectivo? Su dinero ‘sucio’ del tráfico se convierte en dinero ‘limpio’ de la

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 8 economía formal, inclusive pagando impuestos por medio del consumo, en minutos. Del mismo modo, pero en otra escala, un contenedor de café (con cientos de kilos de cocaína de sobrepeso) puede ser enviado a Europa, por el Puerto de Santos, generando divisas no oficiales –pagadas en efectivo– para la compra de, entre otras cosas, una finca en la frontera con Bolivia y de una Toyota SW4 nueva, valuadas en 4 millones de reales. En transacciones internacionales, como en las nacionales, son innumerables –y ya muy conocidas– las formas de lavado de activos: bitcoins, facturas falsas emitidas por hoteles, estaciones de servicio o concesionarios de automóviles, pero también joyas y obras de arte carísimas, o incluso jugadores de fútbol e inversiones mesiánicas de iglesias multinacionales. El dinero "sucio" se convierte en dinero "limpio". En términos analíticos, por lo tanto, cuando se toma el dinero como objeto mediador a estudiar, no hay punto final de un mercado ilegal e inicio de otro, legal. Hay una relación directa entre ellos, mediada por el consumo, o indirecta, mediada por otros mercados (los de lavado de activos, pero también los de subastas y seguros, todos legalmente constituidos). La economía monetaria conecta mercados legales e ilegales.

Esta máquina de producción de desigualdad y circulación de dinero es, por la ausencia de regulación pública y altas tasas de ganancia, también una máquina de producción de violencia. Violencia entendida como el uso de la fuerza, sobre todo de la fuerza armada, toda ella concentrada en la interacción entre ladrones, víctimas y policías, que paradójicamente están del mismo lado, el más débil, en esa cadena de negocios. Esta violencia también llega, como amenaza de asalto o incluso asaltos consumados, a subastadores, revendedores de automóviles o fabricantes de la industria automotriz, que venden nuevos automóviles comprados con indemnizaciones de seguros. Pero ella es mucho más radical entre jóvenes como Samuel. Entre las víctimas de homicidio en São Paulo, los datos son claros: el 59% de los muertos por las policías estaban involucrados en robos y hurtos de vehículos (Silva, 2019), más del 70% son jóvenes, negros, de periferia y operadores bajos de mercados ilegales (Anuário, 2018).

Conflicto de Intereses El autor declara no poseer conflicto de interés

Referencias Agier, M. 2009. Esquisses d’une anthropologie de la ville. Lieux, situations, mouvements. Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant (« Anthropologie prospective » 5).

Agier, M. 2011. Le Couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun. Bellecombe-en-Bauges, Éd. du Croquant.

Anderson, N. 1923. The hobo: The sociology of the homeless man. Chicago: University of Chicago Press

Andreas, P y Wallman, J. 2009. “Illicit markets and violence: what is the relationship?”. Crime Law and Social Change, 52(3), pp. 225–229. https://doi.org/10.1007/s10611-009-9200-6

Arias, ED y Barnes, N. 2016. Crime and plural orders in Rio de Janeiro Brazil. Current Sociology, 65(3), 448–465. https://doi.org/10.1177/0011392116667165

Arias, ED y Goldstein, DM. 2010. Violent pluralism: Understanding the new democracies of Latin America. In E. D. Arias & D. M. Goldstein (Eds.), Violent democracies in Latin America (pp. 1–34). Durham, NC: Duke University. https://doi.org/10.1215/9780822392033-001

Becker, GS. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, 526–36. https://doi.org/10.1086/259394

Beckert, J y Dewey, M. 2017. The Architecture of Illegal Markets: towards an e

sociología conómica de la ilegalidad en la economía. Oxford: Oxford University Press, p. 336. https://doi.org/10.1093/oso/9780198794974.001.0001 Biondi, K. 2016. Compartiendo esta caminata: una etnografía de la vida carcelaria y el PCC en Brasil. The University of North Carolina Press. https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469623405.001.0001 Biondi, K. 2010. Junto e Misturado: uma etnografia do PCC. São Paulo: Terceiro Nome/Fapesp. Blokland, T. 2008. Enfrentando la violencia: riesgos cotidianos en un proyecto de vivienda estadounidense, Sociology, 42(4): 601–617. https://doi.org/10.1177/0038038508091617 Cefaï, D. (ed.) 2010. L’Engagement ethnographique. Paris, Éd. de l’EHESS. Cefaï, D. y Gardella, E. (eds.) 2011. L’Urgence sociale en action. Ethnographie du Samu social de Paris. Paris, La Découverte (« Textes à l’appui. Série Bibliothèque du MAUSS »). https://doi.org/10.3917/empa.084.0018 Dewey, M. 2012. Protección policial ilegal y el mercado de vehículos robados en Buenos Aires. Journal of Latin American Studies, 44(4): 679–702. https://doi.org/10.1017/S0022216X12000831 Feltran, GS. 2019. Ciudad enredada. Manchester University Press (de próxima aparición).

Feltran: Economías (i)lícitas en Brasil 9 Feltran, GS. 2010a. Crime e castigo na cidade : os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo. Cadernos CRH, 23: 59–73. https://doi.org/10.1590/S0103-49792010000100005 Feltran, GS. 2010b. Periferias, direito e diferença : notas de uma etnografia urbana. Revista de antropologia 53(2): 565–610. Feltran, GS. 2011. Fronteiras de tensão. Política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Ed. UNESP/CEM. Feltran, GS. 2012. Governo que produz crime, crime que produz governo : o dispositi-

vo de gestão do homicídio em São Paulo (1992–2011). Revista Brasileira de Segurança Pública, 6(2): 232–255. Feltran, G e Horta, F. 2018. Drogas, carros, seguros: negócios articulados. In Labate, Beatriz C., & Rodrigues, Thiago (orgs). (2018). Política de Drogas no Brasil: Conflitos e Alternativas. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo, Núcleo Interdisciplinares de Estudos sobre Psicoativos (NEIP). Gluckman, M. 1958. Analysis of a Social Situation in Modern Zululand. Manchester, Manchester University Press. Goffman, E. 1952. On Cooling the Mark Out: Some Aspects of Adaptation to Failure. Psychiatry, 15(4): 451–463. https://doi.org/10.1080/00332747.1952.11022896 Goffman, E. 1967. Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior. Garden City, Anchor Books. Guyer, J. 2004. Marginal Gains: monetary Transactions in Atlantic Africa. University of Chicago Press Guyer, J. 1995. Money Matters. Instability, Values and Social Payments in the Modern History of West African Communities. Heinemann, 1995. Hartnett, A e Dawdy, SL. 2013. The archaeology of illegal and illicit economies. Annual Review of Anthropology, 42: 37–51. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155452 Hirata, DV. 2018. Sobreviver na adversidade: mercado e formas de vida. EdUFSCar. Hirata, DV e Grillo, C. 2017. Sintonia e amizade entre patrões e donos de morro: Perspectivas comparativas entre o comércio varejista de drogas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tempo soc. [online], 29(2): 75–98. https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2017.125494 Joseph, I. 1998. La Ville sans qualités. Paris, Éd. de l’Aube (« Monde en cours. Société »). Marques, VA. 2015. Fé & Crime: evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo. São Paulo: Fonte Editorial. Masciandaro, D. 2000. Illegal sector, money laundering and legal economy: a macroeconomics analysis. Journal of Financial Crime 8: 103–112. https://doi.org/10.1108/eb025972 Melo, FAL. 2015. As prisões de São Paulo: dinâmicas, fluxos e as implicações nas trajetórias de egressos prisionais: uma perspectiva a partir do monitor preso de educação. São Paulo: Alameda. Misse, M. 2018. Violence, Criminal Subjection and Political Merchandise in Brazil: an overview from Rio. International Journal of Criminology and Sociology. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2018.07.09 Misse, M. 2009. El delito como parte del mercado ilegal: violencia, mercancia política y narcotráfico en Rio de Janeiro. In: STANLEY, R. (dir.). Estado, violencia y ciudadanía em América Latina. Madrid: Entimem Misse, M. 2006. Crime e violência no Brasil contemporâneo: estudos de sociologia do crime e da violência urbana. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Misse, M. 2002. “Rio como bazar: a conversão da ilegalidade em mercadoria política”, Insight Inteligência, no. 3. Mitchell, JC. 1956. The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships Among Urban Africans in Northern Rhodesia. Manchester, Manchester Univers

ity Press. Neiburg, F. 2007. Las monedas enfermas, los números públicos y la antropología del dinero. Mana, 13(1): 119–151. https://doi.org/10.1590/S0104-93132007000100005 Padovani, N. 2015. Sobre casos y matrimonios: afectos y “amores” a través de penitenciarías femeninas en São Paulo y Barcelona. Uni-

camp. Tesis de doctorado en Antropología Social. Rabossi F. 2011. Negociaciones, asociaciones y monopolios: la política de la calle en Ciudad del Este (Paraguay). Etnográfica (Lisboa), 15: 83–107. https://doi.org/10.4000/etnografica.814 Silva, EC. 2019. Informe para la investigación Autos y Valor en São Paulo, 2019 (mimeo). Simmel, G. [1900] 1990. Filosofía del dinero. Londres: Routledge. SUSEP. 2019. http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/RankRoubo/resp_menu1.asp. Thévenot, L. 2006. La acción en plural: sociología de los regímenes de compromiso. París: La Découverte. Tilly, C. 1998. Desigualdad duradera. University of California Press. Whyte, WF. [1943] 2005. Sociedad de esquina. Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Wilkinson, J. 2016. Mercados disputados: una visión general. Antropolítica Revista UFF, n.º 41. https://doi.org/10.22409/antropolitica2016.0i41.a487

Williams, P. 2009. Illicit markets, weak states and violence: Iraq and Mexico. Crime, Law and Social Change, 52(3): 323–336. https://doi.org/10.1007/s10611-009-9194-0

Willis, GD. 2015. The Killing Consensus: Police, Organized Crime, and the Regulation of Life and Death in Urban Brazil. University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520285705.003.0006

Zaluar, A. 1985. A máquina e a revolta. 1a ed., São Paulo, Brasiliense.

Zelizer, V. 2011. Economic Lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton University Press, Princeton. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691139364.001.0001

Cómo citar este artículo: Feltran, G. 2019. Economias (i)lícitas no Brasil: uma perspectiva etnográfica. Journal of Illicit Economies and Development, 1(2). DOI: https://doi.org/10.31389/jied.28

Enviado: 10 de octubre de 2018 Aceptado: 08 de marzo de 2019 Publicado: 05 de junio de 2019

Derechos de autor: © 2019 El/los Autor(es). Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Atribución 4.0 (CC-BY 4.0), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que el autor y la fuente originales sean acreditados. Ver http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Journal of Illicit Economies and Development es una revista de acceso abierto revisada por pares publicada por LSE Press.

ACCESO ABIERTO